

Guerra y política en Colombia

Miguel Ángel Beltrán V.

Resumen

El autor ofrece una amplia reflexión sobre algunos elementos que han configurado la conflictiva realidad de Colombia. Presenta la historia, el accionar y las repercusiones de las guerrillas del país, de sus relaciones con el gobierno, de los acuerdos, del comportamiento de las Fuerzas Armadas, del fenómeno paramilitar, del juego político dado entre estas fuerzas, haciendo un examen crítico de tales fenómenos. Asimismo reflexiona sobre la relación entre guerrilla y narcotráfico ofreciendo elementos de duda y de sorpresa, para, finalmente, con este abanico entremezclado de factores de naturaleza estructural, describir algunos momentos de negociación que han pretendido resolver el conflicto armado para caminar hacia una solución política, que por muy difícil y obstaculizada que parezca, pueda ser generada por todos los actores involucrados.

Abstract

The author analyzes some issues that has been configured the conflicting reality in Colombia. He presents guerrilla's history, actions and repercussions along the country; its relations with government, the agreements, the Armed Forces behavior, the paramilitar phenomenon. The political game between this forces, making a critical analysis of such items. In the same way, he examines relations between guerrilla and narcotraffic offering some surprise elements. And with this mix path of multiple structural factors, he traces some negotiated moments that has pretended resolve the army problem looking for a political solution, it seems difficult perhaps, but it can be generate by the involved actors.

A principios de septiembre de 1996, los diarios nacionales publicaron la noticia de la toma de la base militar de las Delicias (Caquetá) por una columna guerrillera del Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), como parte de una campaña militar nacional que días atrás venía adelantando esta organización guerrillera. De acuerdo con estos informes, en la acción fueron muertos 27 militares, heridos 16 y hechos prisioneros 60.

Para algunos analistas se trató de "la peor derrota del Ejército en casi medio siglo de lucha contra la subversión"; para otros, la acción militar insurgente constituyó un llamado de atención sobre la necesidad de "redimensionar el poder de los insurgentes y la misma actitud del Estado".¹

A casi cinco décadas de la emergencia de las primeras guerrillas colombianas conviene adelantar una reflexión en torno a algunos elementos que han configurado el conflicto.

¹ "¿Se está perdiendo la guerra?", en *El Tiempo*, Santafé de Bogotá, 8 de septiembre, 1996, p. 6a.

Guerrillas en conflicto

Pese a que se han desmovilizado varias organizaciones guerrilleras en el transcurso de la década –Movimiento 19 de abril (M-19), un amplio sector del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Indigenista “Quintín Lame” (MAQL) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS)–, el conflicto armado en Colombia no ha disminuido. Según un Informe de la Unidad de Justicia y Planeación Nacional, publicado en 1995, entre 1990 y 1994 las FARC pasaron de 5 mil 380 a 6 mil 900 hombres y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de mil 600 a 2 mil 700.²

Estos dos últimos grupos junto con una pequeña fracción disidente del EPL constituyen hoy la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). No obstante haber transcurrido diez años desde su conformación (1987), la unidad del movimiento guerrillero en Colombia sigue siendo un proyecto más que una realidad.

Los diferentes orígenes históricos de sus organizaciones, sus variaciones ideológicas y organizativas, sus diversos modos de operar y sus formas de establecer relaciones con sus bases sociales han dificultado el proceso de unidad orgánica. De allí que en el análisis sea necesario diferenciar los tres componentes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 1964

Si bien las FARC hunden sus raíces en las luchas agrarias y de autodefensa orientadas por el Partido Comunista en los años cuarenta y cincuenta, sus orígenes más próximos se encuentran en las acciones militares desarrolladas contra las zonas de autodefensa campesina en 1964, las cuales se habían venido conformando tras un largo proceso de colonización en Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, bajo el liderazgo de viejos dirigentes agrarios y guerrilleros.

Estas zonas campesinas contaban con una estructura organizativa propia, con formas de autogestión que desconocían el Estado mismo y mantenían su carácter defensivo armado, aunque su objetivo no era derribar el sistema “sino defender por medio de las armas la autogestión económica y una forma embrionaria de organización política”.³ Sin embargo, muy pronto se iniciaron las presiones del ejército y los latifundistas contra esas regiones, a través del asesinato de sus principales dirigentes, el establecimiento de puestos militares y el estímulo a

² *Ibid.*

³ Alfredo Molano, “Violencia y Colonización”, en *Revista Fina*, Bogotá, Colombia, junio, 1988, núm. 6, p. 27.

grupos armados que asaltaban los caminos e incendiaban las casas de los campesinos.

Para 1964, el gobierno decidió atacar estas zonas agrarias en lo que se conoció como la "Operación Marquetalia". La ocupación –según relata uno de sus protagonistas– se produjo con la disponibilidad de 16 mil hombres para tender el cerco a los alrededores de Marquetalia en los departamentos de Huila, Cauca y norte del Tolima, y de esta manera, ir estrechando el cerco hasta lograr la aniquilación del núcleo revolucionario, el cual más tarde se convertiría en las guerrillas móviles.⁴

El 20 de julio de 1964 los combatientes de Marquetalia proclaman el "Programa Agrario de los Guerrilleros" que con algunas modificaciones se erige en el programa de las FARC-EP, y donde se plantea la perspectiva de la lucha armada. Dice el documento:

Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la lucha democrática de masas, las vías legales que la Constitución de Colombia señala. Esa vía nos fue cerrada violentamente... nos tocó buscar la otra vía, la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder.⁵

Los núcleos campesinos que resistieron la agresión se desplazaron en pequeños grupos de guerrillas móviles a otras regiones con tradición de lucha y organización agraria y, en la Primera Conferencia Guerrillera, celebrada a fines de 1965, conforman el "Bloque Sur" definiendo planes de acción militar, política, organización, educación y propaganda.⁶

Poco después de la Segunda Conferencia, la organización sufrió un duro golpe del ejército que le significó la pérdida del 70 por ciento de su fuerza. A partir de este momento y hasta la realización de su Quinta Conferencia en 1974, el movimiento –que logra restituir su fuerza– vive un proceso de crecimiento lento pero continuo, configurándose ante todo como una fuerza política local, articulada a un proyecto político de alcance nacional. Estos cambios permitieron

⁴ Manuel Marulanda Vélez, "27 de mayo de 1994: 30 años de las FARC-EP", en *Publicación Internacional*, México, 1996.

⁵ Jacobo Arenas, *Diario de la Resistencia de Marquetalia*, Bogotá, Abejón Mono, 1972.

⁶ Jacobo Arenas, *Cese el fuego. Una historia política de las FARC*, Bogotá, Oveja Negra, 1975. Un año después, en la Segunda Conferencia Guerrillera, los destacamentos militares del "Bloque sur" se constituyen en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nombrando un Estado Mayor para todo el movimiento y planteando el inicio de una lucha prolongada por la toma del poder.

que las FARC avanzaran en sus Sexta y Séptima Conferencias hacia la formulación de un plan nacional militar.

En la Séptima Conferencia, realizada en mayo de 1982, la organización adopta la denominación de Ejército del Pueblo (FARC-EP) y define un "nuevo modo de operar" como parte de una estrategia claramente ofensiva. Esta nueva concepción estratégica supone, de acuerdo con sus dirigentes, "que las FARC ya no esperan a su enemigo para emboscarlo, sino, que van en pos de él para ubicarlo, asediarlo y coparlo".⁷

Combinando la acción militar y todas las formas de luchas de masas, las FARC llegan a la mesa de conversaciones con el gobierno y firman con él los Acuerdos de Cese al Fuego y Tregua, el 28 de marzo de 1984. En estos acuerdos las partes firmantes asumen el compromiso de un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto.

Tras el fracaso de estas conversaciones y los permanentes hostigamientos y operativos militares contra sus frentes guerrilleros, las FARC-EP responden con acciones ofensivas, desarrollando operaciones urbanas, suburbanas y de sabotaje que desembocan en dos rondas de diálogos con el gobierno de César Gaviria (1990-1994), primero en Caracas, Venezuela (junio de 1991) y luego en Tlaxcala, México (marzo de 1992), las cuales son suspendidas cuando el gobierno, de manera unilateral, introdujo nuevos puntos a la agenda de negociaciones, pero a la vez por algunas acciones guerrilleras que colocaron en entredicho su voluntad de paz.

Entre el 27 de marzo y el 3 de abril de 1993, las FARC-EP efectúan su Octava Conferencia Nacional. En ella la organización insurgente hace un balance positivo de once años de actividad desde la última conferencia; examina los costos de la aplicación de las políticas neoliberales y "de terror militar" en el país, al mismo tiempo que propone la lucha por un "Nuevo Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional" basado en una plataforma de diez puntos que destaca, entre otros, la solución política al conflicto colombiano, la democratización de las Fuerzas Armadas, la participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones, el desarrollo y modernización económica con justicia social y la realización de una política agraria democrática.⁸

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), 1965

En la conformación del ELN confluyen varios factores. En primer lugar, el impacto de la Revolución Cubana a través de la "Brigada José Antonio Galán"

⁷ *Ibid.*

⁸ "Conclusiones de la Octava Conferencia Nacional de las FARC-EP", en *Boletín Internacional*, s/f.

(1963), integrada por Víctor Medina Morón, Fabio Vásquez Castaño, Heriberto Espitia, Ricardo Lara Parada, Luis Rovira, Mario Hernández y José Merchán,⁹ cuyo propósito era regresar al país con el fin de impulsar la lucha revolucionaria y organizar simultáneamente, con la actividad política, los grupos que en la ciudad y el campo desarrollarían la lucha armada.

A este grupo se suman vertientes de la guerrilla liberal de Rafael Rangel, elementos radicalizados del movimiento estudiantil procedentes de la Asociación Nacional de Universitarios de Santander (AUDESA), luchadores petroleros agrupados en la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de organizaciones juveniles como la Juventud Comunista (JUCO) y las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal (JMRL), a los que se vinculará, posteriormente, una corriente revolucionaria de la Iglesia, encarnada en la figura del sacerdote Camilo Torres.

El 7 de enero de 1965 este núcleo armado realiza la toma de la población de Simacota (Santander) y, en un manifiesto firmado por Carlos Villarreal (Fabio Vásquez Castaño) y Andrés Sierra (Víctor Medina Morón), anuncia que "la lucha revolucionaria es el único camino de todo el pueblo para derrocar el actual gobierno de engaño y violencia".¹⁰

En el periodo que se extiende de 1965 a 1972, el ELN vive una etapa de expansión y crecimiento, marcada por el peso de una concepción foquista y militarista que lleva a la desertión y fusilamiento de muchos militantes entre ellos importantes dirigentes fundadores.

Para principios de los años setenta, la organización cuenta con aproximadamente 250 hombres distribuidos en cinco columnas móviles. Se empezaron a delinear nuevas zonas de operaciones en Antioquia, sur y norte de Bolívar y Santander. Se pensó en extender el trabajo de la organización hacia el occidente de Antioquia, buscando el río Nechi y el río Cauca. Esta ampliación se emprende con una columna que crece hasta contar con 120 hombres. Anorí constituía la cabecera del municipio de esta región. Desde el punto de vista militar era el objetivo más cercano y apropiado del grupo. Según el ELN el grupo era muy pesado y grande para penetrar una zona no explorada suficientemente, razón por la cual pronto es detectado y se emprende contra él el cerco que ha de producirle a la organización la derrota militar más grande de su historia. Después de Anorí, el ELN inicia un proceso de crisis profunda que va a tomarle prácticamente diez años en superar.¹¹

⁹ Jaime Arenas, *La guerrilla por dentro. (Análisis del ELN colombiano)*, Bogotá, Tercer Mundo, 1975, p. 16.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Carlos Medina, *Burradas de su investigación sobre el Ejército de Liberación Nacional*.

A partir de 1983, la organización inicia una etapa de replanteamiento, desarrollo y proyección nacional. Su accionar militar se concentra en el ataque a la infraestructura petrolera, agitando como bandera de lucha la búsqueda de una política nacionalista en el manejo de los recursos naturales por parte del Estado.

En 1986 el ELN conforma la Trilateral Guerrillera con el PRT y el MIR-Patria Libre. Un año después, con la fusión orgánica de esta última organización se crea La Unión Camilista -Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN)- que poco después participará junto con las FARC-EP y el EPL de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).

En estos años el ELN avanza de un rechazo absoluto a cualquier diálogo con el gobierno hacia una postura más flexible frente a la posibilidad de abrir márgenes de negociación política. Esto explica su participación en los diálogos de Caracas y Tlaxcala, como parte de la CGSB.

Tras los fracasos de estas conversaciones la UC-ELN señala en su tercera reunión nacional "Héroes y Mártires de la Nueva Colombia" (1993):

Esta guerra se nos ha impuesto desde tiempo atrás por política del Pentágono hacia América Latina, a través de la Doctrina de Seguridad Nacional y la oligarquía de este país, su fiel servidora que la agencia y desarrolla. Así las cosas, nosotros la aceptamos, la asumimos y estamos dispuestos a morir en ella si es preciso. Si la oligarquía de este país y el imperialismo no dejan otra alternativa seguiremos con nuestra lucha libertaria y con nuestras armas bien en alto, sin asomo de cansancio o signos de frustración.¹²

En este mismo año, la Corriente de Renovación Socialista, un desprendimiento de la UC-ELN entra en negociaciones con el gobierno que conducen a su desmovilización.

En relación a la eventualidad de un diálogo, el máximo dirigente de la UC-ELN, Manuel Pérez, ha señalado recientemente: "Se han hecho intentos y estamos dispuestos a repetirlos cuando veamos garantías de respeto para nuestros voceros y condiciones o posibilidades de que se vayan construyendo acuerdos equitativamente manejados".¹³

¹² "Luchamos por Construir un Nuevo Gobierno", en *Caminos*, México, abril, 1994, p. 6.

¹³ "Habla Manuel Pérez, jefe del ELN. 'Diálogo, difícil pero posible'", en *El Tiempo*, Santafé de Bogotá, 10. de septiembre, 1996, p. 8a.

EL Ejército Popular de Liberación (EPL)

El EPL tiene sus antecedentes en el surgimiento del Partido Comunista Marxista Leninista PC(ML), en 1965, como expresión de la lucha ideológica que, en el plano internacional, condujo a la escisión del bloque chino-soviético.

El EPL se constituye en 1967 como brazo armado del PC(ML), pero en su proceso de conformación de bases sociales logra articular tradiciones de lucha provenientes de las viejas guerrillas liberales lideradas por Julio Guerra, de las luchas campesinas en la zona del Sinú y San Jorge y, posteriormente, de las luchas bananeras en el Urabá antioqueño.

En los años setenta el movimiento sufre varias escisiones y un debilitamiento militar debido a los golpes propinados por el ejército. Sin embargo, en 1979 el movimiento inicia un periodo de reactivación con el ingreso de elementos provenientes del V Frente de las FARC en Urabá y la realización del XI Congreso del PCC-ML que propicia una ruptura con las tesis maoistas que venía sustentando.¹⁴

El trabajo se proyecta, entonces, en una perspectiva nacional, hacia las sabanas de Córdoba, Urabá, la zona montañosa del occidente Antioqueño, sur de Antioquia, Viejo Caldas y, en menor medida, en el Putumayo y el Catatumbo. Es en Córdoba y el Urabá antioqueño donde el EPL logrará su consolidación militar erigiéndose en la principal organización guerrillera en esta zona y contando con una base social sólida.

No obstante,

los requerimientos del proyecto militar, tal como lo concibió esta organización a partir de 1985, implicaron cambios en la modalidad de reclutamiento que modificaron sustancialmente la composición social del EPL. El crecimiento numérico trajo consigo una pérdida de calidad del combatiente, que ahora era rápidamente integrado a las filas sin una preparación política y militar previa.¹⁵

Lo anterior derivó en una pérdida del norte político por parte de este agrupamiento insurgente.

En el X pleno del PCC-ML, reunido a principios de 1990, salen a la luz las contradicciones entre las corrientes favorables a la negociación y las que se oponen a ella. Este debate lleva al fraccionamiento del movimiento: el sector mayoritario liderado por Bernardo Gutiérrez opta por su desmovilización,

¹⁴ Mauricio García Durán, *De la Uribe a Tlaxcala. Procesos de Paz*, Bogotá, CINEP, 1992.

¹⁵ "Actores Violentos", en *Guerrilla y Paz*, Santafé de Bogotá, 1994, p. 102.

mientras que la fracción dirigida por Francisco Caraballo, permanece en armas como parte de la Coordinadora Guerrillera.

A partir de este momento los núcleos armados del EPL han sufrido un creciente debilitamiento, acentuado por la detención de su fundador y máximo líder así como por un creciente distanciamiento respecto a sus bases sociales. Hoy por hoy, el EPL constituye una organización en proceso de extinción.

La criminalización de la protesta política

Bipartidismo y exclusión política

Se ha hecho lugar común entre algunos analistas políticos afirmar que la acción militar de la guerrilla ha criminalizado la protesta social en Colombia. Desde esta óptica de análisis se argumenta que el asesinato de los dirigentes populares que participan en la actividad política legal constituye una respuesta a las acciones militares desarrolladas por la insurgencia armada. Sin embargo, lo que muestra la historia de la oposición política colombiana es que —desde mucho antes del nacimiento de la guerrilla— las alternativas políticas al bipartidismo tradicional intentadas por las vías legales, se constituyeron en blanco del terror oficial, buscando su aniquilación y desarticulación.

La Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) que, en los años treinta constituyó un importante esfuerzo por aglutinar sectores obreros y campesinos, fue prácticamente obligada a disolverse tras los ataques de los llamados "guardias departamentales", organismos armados instrumentados por los latifundistas para defender sus intereses; en estos mismos años y en sus varias décadas de existencia el Partido Comunista Colombiano ha impulsado formas de autodefensa armada como respuesta a la violencia oficial sostenida por los gobiernos de turno.

En los años cuarenta las bases gaitanistas fueron víctimas de la represión oficial, y su carismático líder Jorge Eliécer Gaitán, cayó asesinado en las calles de Bogotá el 9 de abril de 1948, cuando se perfilaba como próximo presidente de la República.

En los años sesenta el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y la Alianza Nacional Popular (ANAPO), que en diferentes momentos encarnaron la oposición a las políticas del Frente Nacional, tuvieron que enfrentar una fuerte persecución contra sus bases. Para los comicios presidenciales de 1970, la ANAPO denunció el "robo de las elecciones" a favor del candidato oficial.

En su "Proclama desde las Montañas" (1966) el sacerdote Camilo Torres, líder del Frente Unido, al anunciar su vinculación a las guerrillas del ELN recogía este sentimiento de frustración:

Cuando el pueblo pedía un jefe y lo encontró en Jorge Eliécer Gaitán, la oligarquía sembró el país de violencia. Cuando el pueblo ya no resistía más violencia y organizó las guerrillas para tomar el poder, la oligarquía inventó el golpe militar para que las guerrillas, engañadas, se entregaran. Cuando el pueblo pedía democracia, se le volvió a engañar con un plebiscito y un Frente Nacional que le imponía la dictadura de la oligarquía.

Concluye diciendo: "Ahora el pueblo ya no volverá a creer nunca más. El pueblo no cree en las elecciones. El pueblo sabe que las vías legales están agotadas. El pueblo sabe que no queda sino la vía armada".¹⁶

Nacimiento, ascenso y genocidio de la Unión Patriótica

En la última década, una de las experiencias más interesantes de oposición ha sido la Unión Patriótica (UP), que surge como producto de los diálogos entre las FARC-EP y el gobierno, iniciados bajo la administración de Belisario Betancur (1982-1986). El acuerdo, que fue firmado posteriormente por otras organizaciones armadas, se vio amenazado por las hostilidades por parte del ejército que, encabezado por el ministro de Defensa General Fernando Llanes, expresó su rechazo a la política de paz adelantada por el presidente Betancur.

Pese al retiro del M-19 y el EPL de la mesa de conversaciones por los atentados que sufrieron sus voceros, las FARC-EP mantuvieron su disposición hacia la tregua y anunciaron su decisión de convertirse en movimiento político legal, dando origen a la Unión Patriótica (UP).

La UP se constituyó en un movimiento amplio de oposición, con perspectivas de poder. En las elecciones de marzo de 1986 (las primeras en que participa el nuevo movimiento político), la UP logra obtener 14 congresistas para Senado y Cámara, 18 diputados en 11 asambleas departamentales y 335 concejales en 187 concejos, triplicando la votación que tradicionalmente había obtenido la izquierda. Dos meses después –para las elecciones presidenciales– el candidato de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, cuadruplica los resultados obtenidos por la izquierda en los comicios anteriores para presidente de la república.

Con estos resultados electorales la UP abre la posibilidad de que la oposición dispute espacios de los que tradicionalmente había estado ausente.

Ante este arrollador avance de la Unión Patriótica, el movimiento se convierte en blanco de la "guerra sucia". Las cifras hablan por sí solas. Según estadísticas

¹⁶ Camilo Torres, *El Cura que murió en las guerrillas*, México, Nova Terra.

proporcionadas por el mismo movimiento y corroboradas por los Informes de Derechos Humanos, en el primer año de vida legal del movimiento fueron asesinados cerca de trescientos militantes.

Ante la perspectiva de la elección popular de alcaldes, que se realizaría por primera vez en 1988, el genocidio contra la UP se intensificó; de los 371 miembros de la UP, electos en las elecciones de marzo de 1986, 15 de ellos (entre los que se contaban 3 parlamentarios) fueron asesinados antes de finalizar el año, y alrededor del 30 por ciento de los candidatos a corporaciones públicas para 1988 caerían asesinados antes de las elecciones.

El 18 de marzo de 1987, el candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, en rueda de prensa celebrada en Bogotá, señaló, con pruebas en mano, a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos directamente en acciones paramilitares y en asesinatos y desapariciones de militantes de la UP. Pocos meses después de formular estas denuncias, Pardo Leal fue asesinado.

Ante el estrechamiento de los espacios político-legales y las reiteradas amenazas contra sus dirigentes, las FARC, que dieron en sus inicios vida al proyecto UP, se vieron empujadas de nuevo a la acción armada.

La UP —que había adquirido una dinámica propia— mantuvo su decisión de seguir participando en la lucha legal, con un costo muy alto en cuanto a organización. El sucesor de Pardo Leal en la dirección del movimiento, el candidato presidencial para las elecciones de 1990 Bernardo Jaramillo Ossa, fue asesinado también pocos meses antes de la contienda electoral. A este crimen se agregan los de muchos otros integrantes del movimiento que, según sus propios dirigentes, alcanzan los 3 mil muertos, gran parte de los cuales se mantienen en la impunidad.

La experiencia de la Unión Patriótica deja en claro que la falta de espacios y garantías para la acción política abierta ha dificultado la conformación de un polo de izquierda en Colombia y, contrariamente, ha fortalecido la opción armada: en diferentes coyunturas, militantes procedentes del gaitanismo, las JMRL, el Frente Unido, la ANAPO y la UP han engrosado las nacientes o ya existentes organizaciones guerrilleras.

En este proceso las Fuerzas Militares han jugado un papel central como instrumento de represión contra los movimientos de oposición que han intentado abrir espacios de participación política. Inspirados en los principios de la *Doctrina de la Seguridad Nacional*, desde los años sesenta, los militares colombianos han asumido una creciente participación en los conflictos sociales, desarrollando acciones contra las zonas agrarias que han escapado al control bipartidista, y actuando contra cualquier expresión reivindicativa de los sectores populares.

El hecho de que el porcentaje de gasto en defensa y seguridad en relación con el gasto público total se haya mantenido más o menos estable desde 1958, mucho antes de que surgieran las grandes organizaciones guerrilleras (FARC, ELN, EPL y M-19), es revelador en relación a este rol cumplido por las Fuerzas Militares. Sospechosamente, la elevación de los niveles de participación del gasto en defensa y seguridad no ha correspondido necesariamente a momentos de avance de la insurgencia armada sino, más bien, de la protesta cívica y popular, considerada por los mandos militares el "brazo desarmado de la subversión".¹⁷

Guerrilla-paramilitares-autodefensas

El fenómeno del paramilitarismo y de las autodefensas en Colombia se ha pretendido explicar como producto exclusivo de los "excesos del accionar de la guerrilla", olvidando que desde hace varias décadas el ejército ha auspiciado la creación de grupos paramilitares y de autodefensa, en cuya dirección independiente o asociada ha contado con el respaldo de sectores políticos nacionales y regionales, gremios de la producción y, durante las últimas dos décadas, con núcleos de narcotraficantes, con el claro propósito de aniquilar cualquier expresión de oposición al régimen.¹⁸

Más allá de que algunos errores de la guerrilla en el tratamiento a la población civil hayan sido aprovechados por estas bandas armadas para implementar sus planes contrainsurgentes, los grupos paramilitares son —como lo han demostrado numerosos organismos defensores de los Derechos Humanos— "el resultado directo de la aplicación de una concepción y una ideología que se enseña en las academias militares, que se implementa en las estructuras del Ejército y que se difunde en los llamados 'sectores dirigentes' del campo político y económico".¹⁹

En los años cuarenta y cincuenta la acción de los llamados "pájaros", "aplanchadores" y "penca ancha", entre otros, estuvo dirigida contra miles de opositores políticos y permitió ampliar la riqueza de empresarios y terratenientes de la época a través del despojo y expropiación de los campesinos.

Durante la década de los sesenta se institucionalizan los grupos de autodefensa, con la promulgación del decreto 3398 de 1965, ratificado por la ley 48 de 1968, que permite la organización de grupos civiles armados para "mantener

¹⁷ Cfr. Francisco Leal Buitrago, *El oficio de la guerra*. Santafé de Bogotá, Tercer Mundo, IEPRI, 1994, Anexo 2.

¹⁸ Las ideas aquí planteadas hacen parte de un trabajo más amplio presentado conjuntamente con Camilo López en el XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, México, D.F., octubre, 1995.

¹⁹ ONG's de Derechos Humanos, *Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia*, Ediciones NOCS, 1995.

el orden", y que son presentados como asociaciones de propietarios para defender sus bienes, pero que en la práctica terminarán coadyuvando con las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva.

La autodefensa es definida por los manuales de combate de contraguerrillas como:

una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros... o para prevenir la formación de grupos armados... Su organización debe estar bajo la dependencia militar, el ejército debe prestar el apoyo necesario para su adquisición y expedición de salvoconductos.²⁰

Bajo los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, el auge del fenómeno paramilitar coloca en evidencia una alianza entre grupos de narcotraficantes, ganaderos y terratenientes, gremios de la producción, élites políticas regionales y Fuerzas Armadas, que logran literalmente arrasarse, mediante masacres y asesinatos selectivos, a la mayoría de líderes comunales, populares y de izquierda.

El "Plan Piloto" del paramilitarismo llevado a cabo en Puerto Boyacá –en donde participaron activamente las Fuerzas Armadas, así como mercenarios israelitas y británicos– pronto se extendió a otras regiones del país. A mediados de 1989, como lo denunciara el entonces Ministro de Gobierno César Gaviria, existían en el país 11 mil hombres organizados en, aproximadamente, 134 bandas paramilitares.

En noviembre de 1994, y por iniciativa del Ministro de Defensa de ese entonces Fernando Botero Zea, se implementó la creación de las "Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural, Convivir"; se trata de agrupaciones civiles que pueden portar armas, previo concepto del Comandante de las Fuerzas Militares, con funciones defensivas y preventivas, así como de comunicación y de inteligencia en apoyo a la fuerza pública. Para abril de 1995, según declaraciones del propio Ministro, habían sido creadas más de cuarenta asociaciones, cobrando impulso el fenómeno paramilitar.²¹

Más recientemente, a mediados de 1996, las Autodefensas celebraron su III Cumbre Nacional. En ella plantean la necesidad de reconquistar zonas "arrebataadas por la guerrilla" y la intensificación de las tareas de inteligencia en las zonas

²⁰ Estudio de ONG's., *El terrorismo de Estado en Colombia*, Ediciones NOCS, Introducción, 1992.

²¹ Oficina Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia, *Los Derechos Humanos en Colombia en 1995: violaciones a gran escala e impunidad*, Bruselas, 1996.

urbanas. Al mismo tiempo afirman que "El desprestigio de la administración Samper plantea una magnífica coyuntura para acrecentar [su] labor de combatientes de la lucha antisubversiva". En el mismo documento se plantea como táctica militar la captura de colaboradores, simpatizantes y familiares de combatientes guerrilleros a la espera de un canje. En cumplimiento de estos planes, varios familiares de comandantes guerrilleros se encuentran en manos de estas agrupaciones de Autodefensa.

Narcotráfico y guerrilla

El término de la *narcoguerrilla* acuñado hace ya varios años por el entonces embajador norteamericano en Colombia, Lewis Tambs, durante la administración Reagan, ha servido a los altos mandos militares para conciliar las nuevas políticas de Washington, que privilegian la lucha contra el narcotráfico, con su tradicional tarea de lucha contrainsurgente.

La pretendida existencia de la *narcoguerrilla*, "enemigo estratégico de las Fuerzas Armadas" —según palabras del actual comandante de las Fuerzas Militares, General Harold Bedoya Pizarro—, además de buscar la deslegitimación política de la lucha insurgente, oculta la existencia de un profundo problema social.

En efecto, detrás de las miles de hectáreas de cultivos ilegales que se extienden en amplias zonas del Caquetá, Guaviare, Putumayo, sur de Bolívar, Cauca y Meta existe una gruesa masa de campesinos que, ante la ausencia de políticas estatales en el campo y de una verdadera reforma agraria, se han visto empujados a ejercer estas actividades ilícitas como medio de subsistencia. Para enfrentar este problema, los gobiernos en turno han recurrido a la fumigación indiscriminada utilizando químicos defoliantes y destructivos sin ofrecer, a cambio, alternativas de sustitución de cultivos. Las fumigaciones que se iniciaron hacia 1980 en la Sierra Nevada de Santa Marta, para combatir los cultivos de marihuana, han venido repitiéndose pese a sus efectos nocivos para la salud humana y el ecosistema.

A finales de 1994 se inició otro proceso de fumigación aérea en el piedemonte amazónico que abarcó un área de cultivo de cuarenta mil hectáreas de coca, lo cual generó un paro agrario de varias semanas.²² En septiembre de 1996 estas protestas se generalizaron en todo el país y fueron respondidas con agresiones militares que dejaron un saldo de varios muertos y heridos.

²² Cfr. Camilo López, "Narcotráfico y conflicto agrario en Colombia", Ponencia presentada en el XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, México, D.F., octubre, 1995.

Las protestas de los cultivadores de coca y amapola han contado con el respaldo de las organizaciones guerrilleras que coexisten en estas regiones, concretamente de las FARC-EP, que en repetidas ocasiones han expresado su rechazo al tratamiento represivo y selectivo que se le viene dando al problema del tráfico de drogas:

... nosotros –manifiestan en un comunicado– no conciliamos con el doble juego que ellos vienen promoviendo: plantear una lucha antidrogas para golpear aún más a los sectores populares excluidos y de paso negarles su derecho a protestar, y simultáneamente lucrarse de los grandes beneficios de este negocio, para así financiar sus campañas electorales, promover sus industrias y centros financieros, cambiar soberanía por dólares, y reforzar su campaña contrainsurgente para que nadie se oponga a sus empresas.²³

Hacia una solución política al conflicto

Desde los años cincuenta, en Colombia se han desarrollado diferentes procesos de negociación entre el gobierno y la insurgencia con miras a la solución del conflicto armado. El primero de ellos fue adelantado en 1953, bajo el gobierno militar del general Rojas Pinilla (1953-1957) que trajo como resultado la desmovilización de los guerrilleros y la entrega de sus armas a cambio de promesas que nunca se concretaron, y de una legalidad para los excombatientes que poco a poco se fue estrechando con su persecución y asesinato.

Durante la administración del presidente Belisario Betancur (1982-1986), se inició un nuevo proceso de diálogo que involucró a las FARC-EP, el EPL, el M-19 y una fracción del Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO).

Los acuerdos firmados entre las FARC-EP y el gobierno –que se sostuvieron por un mayor tiempo que los suscritos por las otras organizaciones guerrilleras– plantearon la apertura de un espacio político unido al compromiso del gobierno de realizar una serie de reformas económicas, políticas y sociales, sin que se contemplara la entrega inmediata de las armas por parte de la organización insurgente.

A diferencia del proceso anterior, en el cual los altos mandos del ejército participaron directamente de las negociaciones sosteniendo conversaciones con los jefes insurrectos, los diálogos iniciados bajo la administración Betancur contaron con la abierta oposición de las Fuerzas Militares. Esto hizo que la tregua transitara por caminos muy difíciles y finalmente se llegara a su ruptura sin que se materializaran los acuerdos. La UP, principal fruto de este proceso, después

²³ "Política antidrogas y protesta social", en *Resistencia*, edición internacional, 1996.

de un crecimiento ascendente concluyó diezmada y desarticulada por efecto de una sistemática política de *guerra sucia* contra sus militantes.

Finalmente, el proceso de paz que se inició en 1989 con el M-19 y que concluyó con su desmovilización y la de cuatro organizaciones más, no significó para el país la realización de reformas estructurales profundas; sólo garantías para los guerrilleros desmovilizados con la aplicación de una ley de indulto y la ampliación del espacio político que hizo posible la convocatoria a una nueva Constituyente. Del mismo modo, se acordó representación parlamentaria para estos grupos, a través del establecimiento de una circunscripción especial para la paz.

La debilidad militar, la ausencia de un proyecto político claro y la fuerza regional, más que nacional, de estas organizaciones, fueron factores que definieron los límites de dicha negociación. Aún así, algunos de los acuerdos firmados fueron incumplidos por el gobierno.

La expedición de la nueva Constitución (febrero-julio de 1991) supuso un avance significativo en el ámbito de los derechos humanos y, en menor medida, de apertura de nuevos espacios políticos. No obstante, por un consenso tácito de los sectores mayoritarios que participaron en la Constituyente (entre ellos el M-19 ya convertido en movimiento político), la nueva Constitución no introdujo cambios sustanciales en asuntos militares y de seguridad, lo que significó que las Fuerzas Armadas mantuvieran sus prerrogativas y su autonomía en el manejo del *orden público*, neutralizando, en la práctica, los logros obtenidos en materia de derechos humanos.

Por otra parte, los diálogos iniciados por el gobierno con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en 1991, no concluyeron en acuerdos que comprometieran a las partes en conflicto. Desde entonces, las FARC-EP como la UC-ELN han manifestado, en diferentes documentos públicos, su disposición a dialogar. Los esfuerzos emprendidos en esa dirección por el gobierno de Ernesto Samper, al principio de su mandato, se vieron empantanados por la negativa de los altos mandos militares de despejar la zona de conversaciones.

Hoy día, las perspectivas de una solución política al conflicto armado, bajo la administración Samper, parecen estar bloqueadas, no sólo por la pérdida de legitimidad de su gobierno —generada por las acusaciones de infiltración de los dineros del narcotráfico en su campaña presidencial— sino por sus pretensiones de ganarle la guerra a la subversión, a través de programas para el fortalecimiento de la inteligencia humana y electrónica, movilidad de tropas por tierra, agua y aire, y un mayor desarrollo en el área de comunicaciones.

Cabe señalar que si alguna lección nos han dejado los procesos vividos en Centroamérica, es que con el aumento del presupuesto para la guerra no es como se va a solucionar el conflicto armado colombiano que ya cubre casi medio siglo de historia nacional.